



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA

31 DE MAYO DE 2017

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada
MARTA GABRIELA MICHETTI,
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador don **FEDERICO PINEDO**

Secretarios:

Señor don **JUAN PEDRO TUNESSI** y señor don **HELIO REBOT**

Prosecretarios:

Señor don **MARIO DANIELE**, señor don **ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN**
y señor don **ÁNGEL TORRES**



PRESENTES:

ABAL MEDINA, Juan Manuel
 AGUILAR, Eduardo Alberto
 AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia
 ALMIRÓN, Ana Claudia
 BARRIONUEVO, Walter Basilio
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BLAS, Inés Imelda
 BOYADJIAN, Miriam Ruth
 CABRAL ARRECHEA, Salvador
 CASERIO, Carlos
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 COBOS, Julio César Cleto
 CREXELL, Lucila
 DE ANGELI, Alfredo
 DURANGO, Norma
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
 FELLNER, Liliana Beatriz
 FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GARCÍA, Virginia María
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
 GIACOPPO, Silvia del Rosario
 GIMÉNEZ, Sandra Daniela
 GODOY, Ruperto Eduardo
 GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
 GONZÁLEZ, Nancy Susana
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LABADO, María Esther
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 LINARES, Jaime
 LOVERA, Daniel
 LUENZO, Alfredo

LUNA, Mirtha María Teresita
 MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
 MARTÍNEZ, Ernesto Félix
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MERA, Enrique Dalmacio
 MIRKIN, Beatriz
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
 ODARDA, María Magdalena
 PAIS, Juan M.
 PÉRSICO, Daniel Raúl
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 PINEDO, Federico
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RIOFRÍO, Marina Raquel
 RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROZAS, Ángel
 SACNUN, María de los Ángeles
 URTUBEY, Rodolfo Julio
 VARELA, Marta Lucía
 VERASAY, Pamela Fernanda
 ZAMORA, Gerardo

AUSENTES, CON AVISO:

ALPEROVICH, José Jorge
 BRAILLARD POCARD, Néstor
 ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
 MARINO, Juan Carlos
 MENEM, Carlos Saúl
 OJEDA, José Antonio
 PEREYRA, Guillermo Juan
 PEROTTI, Omar
 ROMERO, Juan Carlos
 SOLANAS, Fernando Ezequiel

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág 18.)
2. **Entonación del Himno Nacional Argentino.** (Pág 19.)
3. **Homenaje.** (Pág 19)
4. **Aprobación de versiones taquigráficas.** (Pág 19.)
5. **Asuntos entrados.** (Pág 20.)
6. **Refrendo de decretos de la Presidencia.** (Pág 20.)
7. **Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.** (Pág 20.)
8. **Plan de labor.** (Pág 20.)
9. **Tratamiento sobre tablas de proyectos de ley.** (Pág 21.)
10. **Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.** (C.D.-81/16.) (Pág 23.)
11. **Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio.** (S.-206/16.) (Pág 34.)
12. **Incorporación del artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación.** (S.-3.685/15.) (Pág 37.)
13. **Creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.** (C.D.-8/17.) (Pág 38.)
14. **Régimen de reparación a las víctimas de del delito de trata de personas.** (O.D. N° 156/17.) (Pág 40.)
15. **Declaración de zona de desastre y emergencia en diversas localidades.** (S.-1.465/17, S.-2.015/17, S.-2.016/17, S.-1.673/17 y S.-1.997/17.) (Pág 42.)
16. **Manifestaciones.** (Pág 44.)
17. **Redeterminación de los precios de contratos de obra pública destinados a vivienda.** (O.D. N° 133/17.) (Pág 44.)

Declaración de interés por la celebración de la Fiesta de la Vendimia. (S.-702/17.)

Homenaje al doctor René G. Favaloro, con motivo de un nuevo aniversario del desarrollo técnico del bypass. (S.-1.023/17, 1.626/17, 1.669/17 y 1.984/17.)

Repudio y consternación por el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Manchester, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. (S.-1.923/17, 1.932/17 y 1.935/17.)

Adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación Sexual e Identidad de Género. (S.-1.832/17 y 1.870/17.)

Pesar por el fallecimiento de Manuel Mora y Araujo, analista político y social. (S.-1.961/17.)

Declaración de interés por la XXXI Fiesta Provincial y II Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal. (S.-317/17.)

Declaración de interés por la realización de un estudio comparado de la cuenca del río Tíber con las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. (S.-1.989/17.)

Solicitud de informes sobre la quita de frecuencia de vuelos diarios en la ruta Río Gallegos - Buenos Aires y otras cuestiones conexas. (S.-1.751/17.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la recuperación de la empresa Aguas y Saneamiento Argentinos. (S.-866/17.)

Homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del periodista, escritor y traductor Rodolfo Walsh. (S.-993/17.)

Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la sanción de la ley 26.741, de soberanía hidrocarbúfera de la República Argentina. (S.-1.514/17.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la empresa Catamarca Minera y Energética del Estado (CAMYEN), provincia homónima. (S.-674/17.)

Declaración de interés por la Banda Municipal de Música Blas Blotta, del departamento de Rivadavia, Mendoza. (S.-1.865/17.)

Beneplácito por la entrega del doctorado honoris causa al doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. (S.-1.969/17.)

Declaración de interés por la diplomatura en Criminología Orientada a la Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Juan. (S.-1.924/17.)

Declaración de interés por el documental *Aires de Francisco*, de autoría de la cineasta Claudia Dattilo. (S.-1.839/17.)

Preocupación por la publicación de la carta de comidas del restaurante Portezuelo, Salta, que asigna el nombre de mujeres a los platos de su menú de carnes. (S.-1.995/17.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. (S.-1.996/17.)

Declaración de interés por el Premio Joven Empresario Argentino. (S.-1.986/17.)

Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la licitación de la Obra de los Daneses, en la provincia de La Pampa. (S.-1.898/17.)

Beneplácito por la visita al país y las declaraciones del obispo Marcelo Sánchez Sorondo, referidas a la provincia de San Luis. (S.-1.338/17.)

22. Apéndice.

I. Actas de votación. (Pág 68.)

II. Plan de labor. (Pág 76.)

III. Asuntos entrados. (Pág 89.)

IV. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág 1519.)

V. Inserciones. (Pág 2099.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 51 del miércoles 31 de mayo de 2017:

Sra. Presidente. — Queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. — Invito a la señora senadora Pilatti Vergara a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, la señora senadora María Inés Pilatti Vergara procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

10

**LEY NACIONAL DE PROTECCIÓN,
DERECHOS Y GARANTÍAS
DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS (C.D.-81/16)**

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento del C.D.-81/16, dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre la ley nacional de protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos.

Se pone el proyecto en consideración del cuerpo.

Tiene la palabra el miembro informante.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Guastavino. – Vamos a esperar que termine de conversar el senador Fuentes, quien vino con angustia oral. ¡Habrás tenido mucho tiempo de aislamiento en la villa! (*Risas.*)

Sr. Fuentes. – Disculpeme, senador.

Sr. Guastavino. – Como decía la presidenta, estamos tratando el proyecto de ley nacional de protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos, iniciativa que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, en revisión a la Cámara de Senadores.

En verdad, señora presidenta, este tema ha tenido un amplio debate en el ámbito de la comisión. Hemos tenido siete jornadas intensas de debate, de discusión, sobre este proyecto de ley tan necesario. Hay consenso mayoritario –diría yo, unánime– para que efectivamente la Argentina cuente con una norma de esta naturaleza que proteja, defienda y dé garantías a las víctimas.

En estas siete reuniones hemos tenido la posibilidad de abrir la comisión a distintas opiniones. Estuvieron opinando sobre la media sanción el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El Ministerio Público de la Defensa también vino a darnos su opinión al respecto y coincidió en términos generales con el proyecto venido en revisión, más allá de que planteó la necesidad de introducirle algunas modificaciones. Ellos estaban convencidos de que se debía avanzar en la sanción de una ley altamente necesaria y, como es obvio, muy reclamada, sobre todo por las víctimas. También dieron su opinión distintas oficinas de Atención a las Víctimas de las provincias, ONG, distintas asociaciones civiles; en fin, organizaciones que

representan a las víctimas de delitos aberrantes y delitos graves.

Por la comisión han pasado más de cincuenta víctimas o familiares de las víctimas que nos dieron su testimonio, su opinión y, al final de esas exposiciones, no ocurrió otra cosa que terminar de convencernos en forma contundente de que era necesario contar con una ley de estas características. Ello, más allá de que es cierto que el nuevo Código Procesal Penal que hemos aprobado en este Parlamento da mayor visibilidad a las víctimas, pero era y es necesario avanzar en una ley específica que apunte a defenderlas y darles garantías.

En términos generales, señora presidenta, también debo resaltar aquí que ha habido un trabajo muy consensuado entre los distintos senadores integrantes de la comisión y los senadores de distintos bloques, que hicieron sus aportes para ir avanzando. A medida que íbamos teniendo las reuniones y debatiendo, avanzamos en el dictamen de un proyecto de ley que nos convenció de que estábamos en el buen camino. El objetivo es que la Argentina, a partir de la sanción definitiva de ese proyecto –si es que la Cámara de Diputados lo aprueba con las modificaciones que enviemos–, tenga una ley de estas características, tan necesaria y reclamada.

En términos de mencionar los puntos más importantes del contenido del proyecto de ley, pido permiso para leer, presidenta.

Se mantiene que las disposiciones de esta ley son de orden público.

Para esta ley se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito, al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores, etcétera.

Entendimos que la redacción de la sanción de la Cámara de Diputados excedía la finalidad prevista en esta ley.

Se reconoce el objeto de esta ley, que es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, a la asistencia, a la representación, a la protección, a la verdad, al acceso a la Justicia, al tratamiento justo, a la reparación, a la celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado

nacional es parte y demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las Constituciones provinciales y los ordenamientos locales.

Se establece que las autoridades actúen bajo tres principios rectores: la rápida intervención, el enfoque diferencial del problema de acuerdo con cada caso en particular y el principio de no revictimización. Al respecto, cuando escuchábamos los testimonios de las víctimas y familiares de víctimas, veíamos que cuando no se tiene en cuenta a la víctima en el proceso penal, en la mayoría de los casos, se llega a que la víctima termine revictimizada, porque no se le da asistencia ni información. Así, la víctima tiene innumerable cantidad de obstáculos para poder saber qué va a pasar en el proceso penal. Muchas veces, hay casos muy particulares en los que, incluso, ha habido jueces que han otorgado las libertades transitorias y las víctimas se han tenido que enterar por los diarios.

Se estableció en el artículo 5º cuáles eran los derechos de las víctimas y, a su vez, que esta enumeración no es taxativa y no sería entendida como negación de otros derechos no enumerados, entre ellos: a que reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta; a recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; que se respete su intimidad; a requerir medidas de protección; a ser asistida en forma; a ser informada sobre sus derechos; a la mayor celeridad posible; a intervenir como querellante y actor civil en el procedimiento penal, conforme lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento locales; a examinar documentos y actuaciones y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado; a aportar información y pruebas durante la investigación; a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y aquella que disponga medidas de coerción a la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente; a ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión; a solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal; a que se adopten prontamente las medidas de coer-

ción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores; a que les sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia; al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de su derecho cuando, por sus circunstancias personales, se encontrare económicamente imposibilitado de solventarlos.

Se establece también, señora presidenta, la obligación de la autoridad que reciba la denuncia de la víctima de asesorarla acerca de los derechos que la asisten, de informarle los nombres del juez y el fiscal y de informarle la ubicación del centro de asistencia a la víctima más cercano.

También se establece, señora presidente, la presunción de peligro cuando la persona fue víctima de delitos contra la vida, de delitos contra la integridad sexual, delitos de terrorismo, delitos cometidos por una asociación ilícita o una organización criminal, delitos contra la mujer cometidos con violencia de género, delitos de trata de personas.

La autoridad deberá atender el sufragio de los gastos de traslado, hospedaje, sostén alimentario y de urgencias que fueren necesarios cuando, por sus circunstancias personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada de hacerlo.

Un tema muy importante: la víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos y para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo.

También, señora presidente, se crea en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos, que tendrá a su cargo la asistencia a las víctimas de delitos de competencia de la justicia federal en todo el país y de los delitos de competencia de la justicia nacional que actúa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires mientras no pasen a la jurisdicción de la Ciudad.

Como resultado de un debate que terminó realizándose ayer, hemos incorporado la figura del defensor público en el ámbito de la Defensoría General de la Nación y se crean 24 cargos: uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con referencia a

esto, el senador Pais va a hacer algún tipo de corrección al dictamen que hemos firmado, porque ha habido un error involuntario al hacer el traspaso de la versión borrador a la versión final del dictamen que fue tratado en comisión.

Para terminar, con esto creemos, señora presidente, señores senadores y señoras senadoras, que estamos dando sanción a un proyecto de ley ampliamente debatido, ampliamente consensuado y con mucha participación. Rescato la gran participación de las víctimas y el aporte que nos han hecho con sus testimonios.

Creo que, en definitiva, hemos logrado un dictamen que nos parece muy bueno. Esperemos que cuando vuelva a la Cámara de Diputados, esta tome como propias las modificaciones que hemos producido y lo sancione.

Gracias, presidente.

Sra. Presidente. – Al contrario, gracias a usted.

Tiene la palabra el senador Luis Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Seré muy breve.

En primer lugar, quiero decir que coincido con el senador Guastavino y destacar la tarea llevada a cabo por el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías con la participación de todos los actores institucionales, principalmente víctimas y familiares.

La verdad es que en los siete plenarios hemos escuchado testimonios verdaderamente conmovedores de madres, padres y hermanos de las propias víctimas cuyas vidas cambiaron para siempre por un hecho delictivo y que vinieron, con entereza, con el afán de justicia y sin espíritu de venganza, a reclamar y a exigir desde el sentido común la participación de las víctimas en el proceso penal.

La verdad es que este reclamo tiene como antecedentes dos factores centrales que vienen de la mano de la deficiencia del Estado: un Estado que fue deficiente en la instancia de la protección y el cuidado de la integridad física de las personas y también en la etapa posterior, con la consumación del hecho delictivo, la deficiencia del Estado en cuanto a garantizar el acompañamiento, la participación, el patrocinio y la asistencia física y psicológica en todas las instancias.

Desde luego que esto obedece a la estructuración de nuestro sistema penal. El sistema penal está estructurado de una manera tal en la que el victimario es un eje central con determinados principios que van desde la norma penal más favorable en caso de duda hasta la ley penal más benigna, teniendo como propósito central la resocialización de la persona privada de su libertad.

Pero en estos veinte años, así como está estructurado, este sistema colapsó por determinados factores que en este debate no los podemos dejar pasar por alto. En primer lugar, el incremento de los delitos contra la propiedad y contra las personas, la complejidad del delito, la influencia de las redes del narcotráfico, la influencia y la incidencia del narcotráfico en la comisión de delitos de niños y adolescentes, y prácticamente un sistema judicial que ha colapsado en cuanto a la resolución, mediando sentencia en tiempo y forma, que nos lleva a una situación cuasi terminal.

Y esto sumado a una cuestión elemental, que es que la víctima está supeditada a que el titular de la acción pública es el propio Estado; y es el fiscal, como el titular de esa acción pública, el que asume en la práctica el interés del Estado para perseguir conductas punibles.

Entonces, ¿cuál fue el rol de la víctima en todo este proceso? Bueno, el rol de la víctima ante la comisión de un hecho fue el de un simple denunciante, a veces de testigo o, de contar con recursos económicos, de querellante, contratando los servicios de un profesional del derecho. Ese es el hecho práctico y la situación actual de la víctima en el proceso penal.

Ahora bien, desde luego que este derecho penal estructurado bajo estos parámetros requiere las modificaciones que hoy se están dando como primer paso, y estas modificaciones son necesarias.

Yo no las voy a citar, porque fue muy categórico y taxativo el senador Guastavino cuando narró cada una de las herramientas que nosotros otorgamos para lograr no solamente la participación en todas las instancias del proceso, sino también el patrocinio jurídico gratuito, la protección psicológica, la creación de centros de contención. Pero sí me quiero detener en algunos datos estadísticos del sistema nacional de información criminal que reflejan cómo

estamos parados como Estado ante la comisión de los delitos.

En 2015 se registraron en la Argentina un promedio de 7 homicidios por día, 10 violaciones por día, 12 muertes por día por accidentes viales, 27 robos agravados por lesiones o muertes. Estoy hablando de los delitos cometidos por día en la Argentina.

Uno puede hablar de los números fríos de la estadística, pero la verdad es que de las jornadas en las que nosotros participamos, lo que quedó en claro es que, por esas circunstancias de la vida, de la noche a la mañana o de un plumazo, la vida te da una cachetada y perdés a un ser querido. Y esta situación te cambia para siempre. Tal como lo escuchamos, te cambia desde el contexto familiar, desde el contexto de los amigos, pero, quizás, el cambio más fuerte o más potente viene de un Estado que no está o, mejor dicho, de esa sensación de sentir que el Estado está del lado de quien comete el delito y que quien sufre la comisión de ese delito mira a los costados y encuentra una orfandad absolutamente incomprensible.

Por eso, creo que hoy damos un paso realmente responsable, porque este es un proyecto que mejora, con mucha prudencia, la sanción de Diputados. Es un proyecto, como lo ha dicho el miembro informante, que caracteriza y especifica el concepto y el rol de la víctima; los derechos que se les conceden a las víctimas.

Creo que fue un muy buen aporte incluir en este tratamiento el capítulo VI del defensor público de las víctimas. Y es muy importante que el senador Urtubey, que es el autor de este proyecto donde se lo incorpora, se explye, justamente, sobre la importancia de que desde la Defensoría, desde una institución pública que cuenta con herramientas preestablecidas, se pueda contar con auxiliares que funcionen como defensores de las víctimas.

Y para finalizar, solamente me quiero quedar con una reflexión desde el sentido común, presidenta. Hoy tratamos esto porque la visibilidad de determinados hechos aberrantes y, fundamentalmente, el tomar dimensión a través de la mediatización, nos permitió que en ese plenario uno pudiera estar en contacto de manera muy potente con un dolor que, sinceramente, creo yo que es irrecuperable.

Éste es un proyecto que va dirigido a los cientos de miles de víctimas que todos los días sufren algún tipo de delito y cuyos familiares no tienen una cámara que se posa sobre la comisión de ese ilícito. Y el delito golpea en todos los estratos. Acá nadie se salva de la comisión de este tipo de delitos.

Entonces, creo que nosotros, en verdad, no vamos a enmendar el dolor de la pérdida de familiares o de la propia víctima, de los que viven con temor, con miedo, pero al garantizarles la participación en las instancias del proceso –inclusive, como se ha dicho, por más que no se constituyan en querellantes o que un juez pueda notificarles que ese victimario goza de una libertad transitoria o de algún beneficio condicional–, me parece que generamos previsibilidad y, fundamentalmente, hacemos que ese principio rector de la igualdad se pueda plasmar y de que la justicia sea, realmente, justicia para todos.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente. – Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Abal Medina.

Sr. Abal Medina. – Muchas gracias, señora presidenta.

Voy a ser muy breve, pero como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda no quería dejar de hacer tres comentarios al respecto.

En primer lugar, este es un proyecto que, obviamente, tiene incidencia presupuestaria. A nadie le cabe duda. Sin embargo, creo que, en este caso, queda muy en evidencia que, en momentos en que, a veces, se habla del gasto público y de este tipo de cuestiones, acá sí estamos absolutamente convencidos de que es más que necesario, más que urgente y más que importante hacerlo.

También, quiero destacar la tarea realizada por todo este Senado de la Nación, pero muy especialmente por el presidente de la comisión que tuvo la mayor parte de la tarea, el senador Guastavino, pues tenía por delante una labor bastante complicada.

Digo esto porque, en estos casos, es muy fácil armar un proyecto y sacarlo rápidamente, que suena muy bien, que tiene lindos títulos, que se vota y sale en la tapa de los diarios, pero que después no sirve absolutamente para nada. Y lamentablemente en la política argentina –nos

hacemos cargo todos— estamos muy acostumbrados a que estas cosas ocurran. Es el título, la foto, el diario y después...

Al contrario, creo que este Senado de la Nación, en general, y el senador Guastavino, en particular, así como el resto de los senadores que fuimos parte de esta tarea, tuvimos la grandeza de tomarnos el tema con enorme seriedad—incluso recibiendo críticas, comentarios—, y muchas veces, como lo hizo permanentemente el senador Guastavino, escuchándonos hasta muy altas horas de la noche, incluso a veces casi en soledad en algunas ocasiones. Reitero que lo hemos hecho con una enorme grandeza y seriedad para saber que lo que tenía que salir realmente sirviera para transformar la realidad.

En ese mismo sentido, también quiero agradecer a las víctimas, a sus familiares, hijos, amigos que estuvieron con nosotros en las comisiones. Porque todos y cada uno de ellos, cuando estuvieron acá vinieron a contarnos su experiencia, a manifestarnos su dolor con un enorme cuidado, con un enorme respeto y yo creo que, en todo momento, coincidiendo con esta misma idea: no querían que saliera cualquier ley rápidamente; querían que saliera una buena ley, una ley que arreglara estos temas.

Por eso quiero extender nuestro agradecimiento a Viviam Perrone, Matías Bagnato, Isabel Yaconis, Carolina Píparo, María Luján Rey, Emmanuel Terrón, Gladys Cabezas y tantos familiares más que hoy nos acompañan acá al lado y que están esperando que el Senado le dé media sanción a esta ley importante.

Para terminar, muy brevemente, creo que para mí y para todos hubo un testimonio, el de Matías Bagnato —que como todos saben tuvo que ver con la masacre de Flores— no por decir que fue más duro que otros, que simplemente fue enormemente ilustrativo y lo tuvimos por delante.

Más allá de este caso que todos conocemos, él, que tenía en ese momento diecisiete años, que perdió a toda su familia —a sus padres, hermanos, a un amiguito de su hermano— por un loco asesino que incineró a su familia, no sabía si la persona que lo había hecho estaba libre o no estaba libre. Permanentemente recibía amenazas telefónicas diciendo que a él le iba a pasar lo mismo. Está constantemente intentando saber, y él lo dice: “Yo puedo saberlo porque el

impacto mediático que tuvo mi caso hace que la Justicia me dé alguna explicación”. Esa persona, ese asesino que mató a sus padres y que quiere matarlo a él, puede estar libre en la Argentina. Esto es lo que no nos puede pasar más en la Argentina y a partir de lo que seguramente va a hacer la sanción de esta ley rápidamente en la Cámara de Diputados no va a ocurrir más.

Muchísimas gracias.

Sra. Presidente. — Muchas gracias a usted, senador.

Tiene la palabra el senador Urtubey.

Sr. Urtubey. — Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, me sumo a lo dicho por los senadores preopinantes en orden a la tarea de la comisión y a la participación de las víctimas.

Realmente es notable ver cómo personas que han sufrido situaciones extremas que podrían afectar notablemente su equilibrio emocional y su racionalidad, sin embargo han hecho llegar permanentemente a la comisión, tanto de modo público como privado, las mejores iniciativas, bastante coherentes. Iniciativas que fueron receptadas en gran medida por la Cámara de Diputados y que hoy entiendo que van a ser notablemente perfeccionadas con la media sanción que va a dar este cuerpo.

En particular me quiero referir a un aspecto que tiene que ver con el reforzamiento de la Defensoría General de la Nación. Una de las preocupaciones que me aqueja como legislador es que muchas veces hacemos las mejores leyes en términos ideales, receptamos el ideal de Justicia, hacemos buenas leyes que tienen que ver con el bien común y la promoción del bien común, pero me da la sensación de que a veces las leyes no son realizables.

Es decir, no es solamente un tema de presupuesto; es un tema de organización, es un tema de arrancar con instituciones nuevas que cuesta mucho armar. Y muchas veces vemos cómo la mejor intención, la mejor ley escrita queda en el camino de las buenas intenciones.

En ese sentido, con una preocupación compartida también con la senadora Negre de Alonso entendimos que la Defensoría General de la Nación era el ámbito institucional adecuado para cumplir un aspecto central de esta norma.

Esta norma consagra la asistencia integral a la víctima, pero dentro de la asistencia integral—que ya es muy importante que lo consagre, por supuesto, y es absolutamente revolucionario yo diría en el mundo—hay un aspecto de esa asistencia integral que es la asistencia jurídica. Es decir, la alternativa de que las víctimas tengan, todas y cada una de ellas, la posibilidad de un acceso técnico al proceso.

Pero no solamente no se agota la cuestión en un acceso de los ciudadanos a ser escuchados—lo cual por supuesto es central y está garantizado expresamente en la norma—, sino que se establece la posibilidad de que tengan un acceso técnico a la causa para poder también batallar, si se me permite el término, dentro del proceso penal, contra la natural y lógica presencia del defensor técnico del imputado, quien va a hacer—como corresponde—su mejor trabajo, y en la mayoría de los casos de nuestros procesos penales, defensores públicos.

Entonces, la única posibilidad de garantizar un acceso igualitario a este proceso no era solamente consagrar un derecho—lo cual por supuesto que está muy bien—o declararlo en una ley, sino ver cómo hacemos factible esa igualdad de derechos. Y encontramos esta idea de que la Defensoría General de la Nación, que es una institución básica que garantiza el acceso a la defensa de oficio por parte de todo imputado y sometido a un proceso penal, también sea la que se encargue, con la misma igualdad de armas, de la defensa de las víctimas. Parece una contradicción, pero no lo es.

Entonces, creamos una figura que se llama defensor público de la víctima. Hemos creado el cargo—por supuesto—, que deberá ser concursado. Deberán concurrir a ese concurso, que deberá ser ganado. Y deberá haber acuerdo del Senado para que por cada provincia argentina, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exista un defensor público de víctimas.

Y hemos hecho una cosa interesante en la estructura de la asesoría: para no generar esta idea de la cosa inaccesible, imposible, o impagable, hemos promovido a ciento veintitrés procuradores letrados de la Defensoría Pública, secretarios letrados mejor dicho, y prosecretarios letrados, al cargo de defensores coadyuvantes—esta es la expresión—, para que ellos sean ese ejército de funcionarios que puedan asistir a esos defenso-

res públicos de víctimas que vamos a designar y así sea una realidad la presencia y la defensa de la víctima en el proceso.

Creo que esto es muy importante. Creo que es la única forma de que en un proceso la víctima pueda realmente defender sus derechos en el proceso y de que podamos salir de esta historia de la cual la víctima ha tenido que batallar en la opinión pública fuertemente.

Por eso el reconocimiento que hizo Abal Medina a las víctimas es muy justo y necesario. Esperemos que ahora esta inclusión—porque yo creo que esta norma es una verdadera inclusión de derechos de la víctima—permita que tantas víctimas tengan esta posibilidad.

Por supuesto que esperamos cada vez más, como argentinos, que haya menos víctimas y menos delitos. Pero mientras esto no suceda, esperamos que las víctimas puedan tener el papel que les corresponde en un proceso, donde habrán de velar por un acto de justicia elemental, como es que sea castigada justamente la persona que ha sido responsable de la privación o lesión de sus derechos.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.—Muchísimas gracias a usted, senador.

Tiene la palabra la senadora Liliana Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso.—Gracias, presidenta.

Estamos abordando y visibilizando una temática: la temática de la víctima. ¿Y por qué digo que estamos visibilizando? Porque realmente estamos sancionando un proyecto de ley con modificaciones, con respecto a la sanción de la Cámara de Diputados, para luchar contra la teoría de la minusvalía de la víctima. Contra esa expropiación del conflicto de la víctima que se había hecho en el derecho procesal penal y en la jurisprudencia, que no viene de ahora, sino de la época de la Inquisición.

La víctima había sido expropiada del conflicto. Simplemente, había un paralelismo. El defensor del imputado y el fiscal; el resto no existía. Por eso decimos que estamos visibilizando el problema de la víctima e incorporándolo al texto legal.

Esto en realidad tiene toda una lucha y todo un camino que se ha recorrido y a veces nosotros, en el mero tecnicismo jurídico, o en el

avatar del debate legislativo, no vemos caras, sino simplemente artículos de leyes que modificamos y logramos compaginar.

Pero quiero nombrar algunas víctimas más de las que nombró el senador Abal Medina, porque creo que fueron los que dieron la batalla para poder llegar a esta altura, en la que —claro— a mi criterio la cuestión no está resuelta en su totalidad, pero es un avance importantísimo para las víctimas.

Entonces digo que este conflicto, esta iniciativa tiene nombres y caras: Carolina Píparo y su bebé Isidro; Viviam Perrone y su hijo Kevin Sedano; María Luján Rey y su hijo Lucas Menghini Rey; Matías Bagnato, su mamá Alicia, su papá José, sus hermanitos Alejandro y Fernando y su amigo Nicolás Borda; Guillermo Bargna y su hija Soledad Bargna; Jimena Aduris y su hija Ángeles Rawson; Isabel Yaconis y su hija Lucila; Adoración Gutiérrez y su hija María Laura; señor Leónidas Matheu, papá de Mara; Diana Cohen Agrest y todos los integrantes de Usina de Justicia, de Madres del Dolor, de Para que no te Pase, de Red Social Solidaria Responsable, de Familias por la Vida, de la Asociación Civil AVISE, entre otros.

¿Cuál es la realidad frente al hecho trágico irreversible, como ya dijeron acá? Que mientras la víctima a lo mejor está, como en el caso de Carolina Píparo, internada en terapia intensiva, inconsciente, o un padre está recorriendo las morgues tratando de encontrar a su hija, a su hijo o a su mujer, intentando reconocerla frente a hechos trágicos, el imputado y su defensor ya avanzaron a pasos acelerados en el proceso.

Entonces, cuando la víctima o su familia toman conciencia y advierten la realidad que los rodea, hay pasos irreversibles o muy difíciles de revertir en el proceso.

Pero además hay otro gran obstáculo: el económico. Y además hay otro gran obstáculo: la ignorancia jurídica de no saber que en realidad no siempre el fiscal lo va a defender. El fiscal dice que defiende a la sociedad y se aparta. Por eso hablo de expropiación del conflicto dentro del proceso de la víctima.

Entonces, acá la víctima se visibiliza, ingresa, toma cuerpo dentro de este proceso. Y como decía el senador Urtubey, creímos que el mejor título, el mejor llamador, la mejor luz roja o la

mejor luz verde que abren las puertas de ingreso es eso por lo que luchamos y trabajamos para incorporar: defensor de la víctima.

Sé que hay mucha teoría del derecho penal que está en contra de la igualdad de las armas, que está en contra de la igualdad de los instrumentos jurídicos para dar a la víctima y al imputado. Pero el mundo cambió, el derecho cambió, evolucionó. Y estoy en la posición de que la víctima debe tener los mismos derechos que tiene el imputado dentro de un proceso. Porque esos bienes jurídicos que han sido lesionados no tienen forma de devolución.

No hay dinero que compense una vida. No hay dinero que compense la pérdida de un ser querido. No hay condena tampoco. Pero sí, a lo mejor, con un juicio y una condena justa hay una tranquilidad moral o el cumplimiento de un juramento que, a veces, hacen los familiares frente a la víctima o al perder un hijo, una hija, un familiar o un amigo en estas situaciones.

¿Por qué digo que creo que no está todo el camino recorrido o terminado? Porque no hubo el acuerdo suficiente, aunque el derecho evoluciona, para que esto sea de oficio. ¿Y por qué la importancia de ser de oficio? Porque al delincuente o al imputado lo toman e, inmediatamente, tiene al abogado. La familia de la víctima tiene que reponerse de esa gran tragedia y empezar a darse cuenta de qué puede hacer, cómo puede ayudar o, como dijo el presidente de la comisión y también el senador Abal Medina, empezar a recorrer tribunales, mostradores, sufrir maltratos, negativa de información, etcétera. No es lo mismo requerir que sea de oficio a que se le ofrezca. ¿Se puede decir que no? Sí. Si hay medios para pagar, puede preferir un abogado. Pero el Estado debe ir en busca de la víctima y no la víctima golpear puertas en una lucha con el Estado.

Por eso, creo que para poder compaginar esto —y, seguramente, será un próximo paso procesal— habría que encuadrar el tipo de delitos para que el defensor de la víctima actúe de oficio, que no baste con que la víctima lo requiera. Yo había propuesto mediante el artículo 37 ter, que actuaran de oficio frente a las víctimas de delitos contra las personas, la integridad sexual y la libertad en los procesos penales.

Como dijo el senador Urtubey, además de los defensores de la víctima y de los secretarios

y defensores coadyuvantes, hay otra cuestión que es la contención espiritual y psicológica de la víctima, el acompañamiento por parte del Estado cuando ese joven tiene que levantar la sábana en un mármol blanco de la morgue y reconocer a su papá o a su mamá. Esos son los testimonios que hemos escuchado acá.

Entonces, señora presidente, me siento muy contenta de que hayamos podido llegar a un acuerdo y conciliar posturas para modificar la ley del Ministerio de la Defensa a fin de robustecerla y comenzar a recorrer un camino para que luego las provincias argentinas adhieran a la ley de acuerdo al sistema procesal vigente en cada una de ellas. Algunas tienen un sistema acusatorio y otras un sistema inquisitivo, pero estamos seguros de que damos el primer paso y de que, inmediatamente, muchas provincias argentinas van a acompañar el proceso, porque nos preguntaban luego de la última reunión qué iba a pasar en las provincias cuando los delitos sean en ese ámbito y no estén contemplados en el marco de la ley en cuestión. Seguramente, con este avance, las provincias argentinas, en sus respectivas legislaciones, irán adhiriendo a la ley de acuerdo al sistema jurídico imperante en ellas.

Apoyamos el tratamiento del proyecto de ley ya que todo el trabajo y la apertura del Senado a la sociedad, que no es de ahora, sino que viene desde hace varios años, permite conocer realidades y vivencias que nos nutren para mejorar los plexos legislativos y para sancionar instrumentos legales que le sirvan realmente a la gente y no que sean un simple número y año de sanción.

Gracias, presidente.

Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.

Yo sé que no puedo hablar y no puedo opinar sobre los proyectos, pero me voy a correr unos segundos de esto.

En estos temas no solo hay muertes, sino también discapacidad. Y soy, en primera persona, quien vivió la conmoción que significa ese rato en el cual pueden pasar cuatro o cinco meses y uno está todavía asumiendo el tema que tiene y, por ejemplo, en mi caso, después se supo que había problemas técnicos en el auto que yo manejaba, pero a nadie se le ocurrió en ese momento hacer algo que pudiera tener que ver con

evaluar el auto y determinar si tenía problemas o no, y si el accidente había ocurrido por eso.

A un montón de personas les pasará lo mismo y quedan sin el resarcimiento o la compensación que es lógica, no solo por muerte, sino también muchas veces por discapacidad.

Así que me parece muy bueno esto.

Sra. Negre de Alonso. – Es el Estado el que tiene que acercarse inmediatamente a la víctima...

Sra. Presidente. – Exacto.

Sra. Negre de Alonso. – ...y no ser la víctima requirente, sino de oficio. Por ello, yo proponía que fuera de oficio.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente. – Gracias a usted. Les pido disculpas por la digresión.

Tiene la palabra el señor Pais.

Sr. Pais. – Gracias, presidenta.

Es para tratar de redondear lo analizado brillantemente por el miembro informante y por los legisladores que después han hecho uso de la palabra, fundamentalmente en lo relativo al Ministerio Público de la Defensa y a esta ley.

Mire, presidenta: nosotros participamos de largas reuniones y escuchamos a las víctimas de delitos. La mayoría de los derechos que reclamaban las víctimas de delitos están consagrados en el *corpus iuris* de la República Argentina, en el derecho positivo. Pero están dispersos, no sistematizados y dificultados en cuanto a su acceso. Requieren el esfuerzo personal, la inversión económica y transitar y golpear innumerables puertas.

El derecho de la víctima no es otra cosa que el derecho a la tutela efectiva judicial al acceso a la Justicia, que tienen esencialmente quienes han visto vulnerada su integridad psicofísica; es decir, quienes han visto vulnerado hasta su patrimonio por la comisión de un delito.

Bien decía la senadora Negre de Alonso que el Estado, en función del derecho de la sociedad de perseguir el delito porque prohíbe el ejercicio de la fuerza, le ha expropiado, y creo que muy bien, el derecho a la víctima de ejercitar por sí ese derecho que en muchos aspectos se puede creer como una venganza. Pero la vindicta personal no implica que la víctima quede en desamparo.

Es así que cuando uno habla de la tutela judicial efectiva, que es el acceso a la Justicia, quienes más vulnerables están y a quienes más debemos proteger para que accedan a la Justicia son las víctimas de delitos. Esto es lo que hemos comprendido con este tratamiento legislativo y con las presentaciones y las exposiciones de las víctimas.

¿A qué apunta este proyecto de ley? A sistematizar los derechos, a reforzarlos, a reiterarlos hasta el hartazgo, a escribirlos y, fundamentalmente, a facilitar ese acceso a la Justicia. Por eso es que son importantes, primero, los deberes que se le imponen a la autoridad pública. Y cuando hablamos de autoridad pública, fundamentalmente estamos hablando del agente de policía, del funcionario de este organismo que estamos creando, o de cualquier funcionario público del Poder Ejecutivo. También estamos hablando de los jueces, del Ministerio Público de la Defensa y estamos instrumentando la posibilidad de que la víctima sea parte y pueda ser escuchada en todas las instancias, desde la investigación hasta la ejecución de la condena.

En ese marco, hemos sistematizado los derechos de las víctimas. Seguramente, toda iniciativa legislativa es perfectible, pero fíjense que el debate ha sido bueno. Ya el artículo 11 de la ley 27.149, la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, había analizado esta falencia estructural y bien señalaba ayer la senadora Negre de Alonso que preveía no ya la prestación de este servicio, sino la implementación de un programa para lograr el servicio. Esto explica casi que la ley fuera medio programática en algunos aspectos, para lograr ser operativa. Acá, también se modifica el artículo 11 y se la hace operativa. Debe prestar este servicio, debe facilitar que se constituya en querellante, debe asistir fundamentalmente, que inclusive pueda ser actor civil o que pueda demandar ante los tribunales.

Ojalá que este derecho pueda ser universalizado para todos los argentinos, para todos los habitantes de nuestro país. Esto, en ese marco, va a ser efectivo fundamentalmente, ante los casos que estén presentes en la justicia federal y en la justicia nacional, por eso estamos modificando la Ley de Ministerio Público. Pero la norma es sabia, invita a las provincias a readecuarse.

Creemos que esta ley es tan contundente, tan fuerte, que va a ser rectora para que otras provincias, que ya tienen incorporado el Ministerio Público de la Defensa, la adapten y adopten similar respuesta. Y en este marco, creemos que —bien decía el senador Urtubey— las estructuras están, las podemos optimizar, necesitamos readecuar nuestro ordenamiento jurídico y, a lo mejor, el costo económico al que se refería Abal Medina no tiene tanto impacto. Y lo que sí podemos hacer es más direccionado, más eficiente el gasto público y más eficiente la respuesta institucional de todo el Estado: del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa, que no es el Poder Judicial, es un ámbito específico extra-poder.

En este marco, presidenta, esta es una respuesta que pretende hacer efectivo el derecho de la víctima al acceso a la Justicia en todas las instancias. Tenemos consagrado en el Código Civil el derecho al resarcimiento integral. Tenemos consagrado en los códigos procesales el derecho a querellar. Tenemos consagrado el derecho a demandar en los códigos procesales civiles. Y también, en los códigos procesales, como actores civiles, en las causas penales.

Los derechos están, están dispersos. En muchas provincias se ha avanzado con centros integrales de atención a las víctimas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen. En la provincia de Chubut, existen. En muchas provincias, existen. Pero esta ley tiene otra fuerza. Creemos que mientras el tratamiento legislativo siempre enriquece, lo de ayer fue contundente. Es decir, darle este rol al Ministerio Público de la Defensa. Y esperemos que prontamente podamos generalizar e implementarlos. Todavía tenemos que nombrar a los veinticuatro defensores, que van a ser una suerte de ombudsman de la víctima, porque a lo mejor no van a estar en el lugar específico.

Hay provincias que tienen juzgados federales en tres o cuatro ciudades. Vamos a elegir un defensor. Pero en cada una de esas ciudades en donde hay juzgados federales, hay defensores y hay secretarios que van a poder actuar como defensores coadyuvantes. Lo que sí vamos a tener es un funcionario que va a estar preocupado y ocupado en indicarles a las víctimas de delitos federales —esperemos que también sean los delitos ordinarios de las jurisdicciones provinciales

y locales—: ocupado de que los defensores coadyuvantes estén atentos, pendientes, asistiendo a las víctimas, ofreciéndoles la asistencia y la representación legal, para constituirse en querellantes, ofreciéndoles la posibilidad de que también accionen para el resarcimiento. Ese es el avance sustancial que hemos hecho.

Entre los que charlamos ayer en comisión y lo que quedó en el dictamen, advertimos, tal vez porque uno a veces delega en el cuerpo de asesores la síntesis de lo tratado, que existía una discordancia en tres artículos. El texto correcto se lo pasé al secretario parlamentario.

Los artículos son los siguientes. El artículo 30, que habla de los secretarios letrados, que van a pasar a ser, como bien decía el senador Urtubey, defensores públicos coadyuvantes que no tienen la jerarquía de magistrados, con lo cual no estaríamos avanzando sobre un proceso de selección que requiere concurso público de antecedentes y oposición, que requiere la participación del Poder Ejecutivo, plazos para impugnar y requiere por supuesto la participación de este Senado, con todo el procedimiento de publicidad previo, para que puedan ser impugnados y sometidos al cuestionamiento de toda la sociedad en algún caso que pudiera ocurrir.

En el artículo 31, los actuales prosecretarios letrados también tendrán la función de defensores públicos coadyuvantes, que son, todos, al ser letrados, abogados. Son abogados con capacidad jurídica para representar este rol de asistir a las víctimas, de poder constituirse en querellantes y de poder accionar como actores civiles, pero siempre supervisados. Ese es el esfuerzo fundamental, el esfuerzo presupuestario más grande, por los 24 defensores públicos de la víctima que en cada jurisdicción, que tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el resto de las provincias tendrán ese rol esencial de tutelar a las víctimas.

Vamos a pedir que se modifique el artículo 35, a efectos de la incorporación del artículo 37 bis de la ley del Ministerio Público de la Defensa, cuyo texto solicitaré que sea leído por el secretario. Creo que hay acuerdo con esta modificación, según lo que tratamos ayer.

Si acordamos con ese texto y con los tres artículos —con lo cual solucionaríamos algún error que hubo en la transcripción—, después

podremos darle sanción a esta ley, en general y en particular.

Sra. Presidente. — Cuando lleguemos a la instancia de la votación, haremos esa lectura. Si está todo el mundo de acuerdo, lo incorporaremos y votamos todo junto.

Tiene la palabra la senadora Crexell.

Sra. Crexell. — Gracias, señora presidenta.

La verdad es que no solo como legisladora quiero acompañar este proyecto, sino también como víctima. En 1995, mi padre muere a causa de un homicidio doloso; y en 2010, mi madre muere a causa de un homicidio culposo, como consecuencia de un delito de tránsito. Por lo tanto, conozco muy bien lo que se siente como víctima y, sobre todo, el desamparo que se sufre por parte del Estado.

No quiero hablar mucho porque sé que me voy a emocionar, y no es la idea. Pero sí agradezco que el Estado acompañe y esté a cargo de lo que tiene que estar. Muchas veces sentimos una profunda injusticia cuando vemos todo el andamiaje del Estado puesto al servicio de aquellos que cometen ilícitos y no de las personas que tenemos que enfrentar situaciones de mucho dolor.

También, quiero felicitar a las víctimas que estuvieron dando su testimonio, que convirtieron ese dolor en algo positivo, se agruparon en asociaciones y lucharon por los derechos de aquellos que quizás no pudieron hacerlo.

Sra. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.

Sra. Elías de Perez. — Gracias, presidenta.

Quiero hacer un reconocimiento, un agradecimiento y un pedido.

Vaya mi reconocimiento, en primer lugar, a los tres presidentes de las comisiones que llevaron a cabo esta importante tarea, especialmente, al senador Guastavino, quien merece el reconocimiento del cuerpo porque ha realizado una tarea titánica con muchísima responsabilidad y hasta altas horas. Fueron reuniones muy dolorosas, muy difíciles, para estar al frente de las comisiones y lo ha hecho con gran valor y responsabilidad.

Le agradezco también a todo el cuerpo, que no se ha dejado llevar por los diarios y demás medios, sino que ha hecho lo que debía hacer

con una enorme responsabilidad, tal como lo merecía una ley de este tipo.

Asimismo, vaya mi agradecimiento a todas las víctimas que han venido al Senado y se animaron a abrir su corazón, a exponer su dolor y a ponerle rostros y nombres a cada una de las víctimas. Pero, por sobre todas las cosas, les agradezco que hayan sido capaces de transformar su cruz en luz y, desde su dolor, partir a luchar para que cambiara una situación dolorosa. También agradezco los testimonios de la presidenta y de la senadora Crexell. Todos esos testimonios son los que han ido mostrándonos la necesidad de esta ley que con gran emoción hoy votaremos.

Por último, quiero pedirles a todos los senadores que tomemos conciencia de que lo que estamos haciendo hoy, que es un paso importantísimo, no resuelve toda la cuestión. Digo esto porque, como ya se expresó, estamos hablando del ámbito federal. Esta será una legislación de forma, no de fondo. En algunas provincias se ha avanzado en esta temática, pero hace falta la modificación de los códigos procesales penales locales. Y esta Cámara es el mejor ámbito para lograr eso, pues acá están los representantes de las provincias. En consecuencia, le pido a cada uno de los senadores que haga lo propio con los legisladores de los distintos bloques de las provincias para que pronto podamos tener esta adecuación y que esta historia de verdad tenga la resolución completa.

Sra. Presidente. – Tal como decía el senador Pais, se va a dar lectura a los tres textos...

Perdón, tiene la palabra el senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Seré breve; me olvidé de decir algo cuando hice uso de la palabra.

Fueron siete jornadas realmente muy intensas, como aquí se ha descripto. Quiero hacer un reconocimiento a los secretarios de las comisiones, a los asesores que han trabajado con muchísimo compromiso, con muchísima comprensión, sobre todo de las víctimas, con muchísima tolerancia. Creo que es justo que este cuerpo también los reconozca en el tratamiento de un proyecto de ley tan sensible.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Lovera.

Sr. Lovera. – Más allá de que adherimos a todos los fundamentos que han dado cada uno de los senadores y senadoras, atento a lo que se habló en labor parlamentaria y a que todos queríamos decir algo al respecto, se acordó que se autoricen las inserciones correspondientes de todos aquellos que quieren expresarse en este tema.

Sra. Presidente. – Lo haremos cuando se traten las autorizaciones.

Ahora pasamos a leer los tres textos que se proponen.

Sr. Secretario (Tunessi). – Leo las reformas a los artículos 30, 31 y 35 del dictamen.

El artículo 30, en la propuesta del senador Pais: Los actuales secretarios letrados del Ministerio Público de la Defensa se transforman en defensores públicos coadyuvantes, de conformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley 27.149.

Artículo 31. Los actuales prosecretarios letrados del Ministerio Público de la Defensa se transforman en defensores públicos coadyuvantes, de conformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley 27.149.

Artículo 35. Incorpórase como artículo 37 bis a la ley 27.149, el siguiente: Artículo 37 bis: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, los defensores públicos coadyuvantes colaborarán con los defensores públicos de víctimas en el ejercicio de las funciones y bajo las condiciones previstas en esta ley cuando ello sea dispuesto por el defensor general de la Nación a fin de asegurar una efectiva prestación del servicio.

Sra. Presidente. – ¿Si están todos de acuerdo?

–Asentimiento.

Sra. Presidente. – Están todos de acuerdo, perfecto.

Ahora sí pasamos a votar las inserciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.¹
¿Hay abstenciones? No.

¹ Ver el Apéndice.

Entonces, si les parece bien, se va a votar en forma electrónica en general y en particular en una sola votación.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). — Resultan afirmativos 58 votos, negativo cero votos, cero abstenciones. Aprobado por unanimidad.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. — Qué bueno. Se comunica a la Cámara de Diputados.²

11

RÉGIMEN DE SUBSIDIOS ESPECIALES PARA LOS MENORES HUÉRFANOS DE MADRE POR CAUSA DE FEMICIDIO (S.-206/16)

Sra. Presidente. — Corresponde el tratamiento del dictamen de comisión en varios proyectos por el cual se crea el régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio u otra forma de violencia de género.

Se pone el proyecto a consideración del cuerpo.

Tiene la palabra el miembro informante, la senadora Iturrez de Cappellini.

Sr. Mayans. — Había tres proyectos en labor parlamentaria.

Sra. Presidente. — Sí, están los tres.

Sra. Iturrez de Cappellini. — Señora presidente: en consonancia con el tema que estamos tratando, el senador Linares, la senadora Aguirre y quien le habla hemos presentado un proyecto que hemos consensuado ayer en un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo, de la Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda. Y hemos creído que es conveniente y necesario destinar un subsidio económico para los huérfanos, o sea, para los hijos de las víctimas de violencia de género o de violencia intrafamiliar.

Esta iniciativa también convoca al Estado a tener un serio compromiso con las víctimas; estamos tratando justamente este tema. Creo que esta iniciativa viene a reforzar y a com-

pletar, aunque quizá nunca habremos hecho todo lo pertinente; es decir, de alguna manera, coadyuva a que la situación de las víctimas no sea tan difícil. Nosotros pensamos que la familia subsiste, aunque seguramente destrozada por los acontecimientos que ha vivido, y creemos que esta es una manera de estar cerca de ellos y de contenerlos.

Por supuesto, hemos especificado en el proyecto el origen de los fondos para hacer esa reparación económica. Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Presupuesto y también hemos evaluado, en los casos de discapacidad, la necesidad de apoderar a terceros para poder percibirla.

Así que muy brevemente, quiero expresar este espíritu que seguro es el de todo el cuerpo y que resulta de la fusión de estos tres proyectos en los que hemos coincidido los senadores.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente. — Gracias a usted senadora. Tiene la palabra la senadora Boyadjian.

Sra. Boyadjian. — Señora presidente: en realidad, como miembro informante y presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, un poco en sintonía con lo que decía la senadora Iturrez de Cappellini, considero que es muy importante que hoy en este recinto estemos tratando este proyecto de ley para que sea aprobado.

Por lo que significa esta reparación para los menores de 21 años que fueron víctimas de violencia intrafamiliar o para los hijos que por alguna situación sufrieron esta violencia dentro de sus hogares, y el femicidio que lamentablemente se ve en nuestra sociedad y hay que seguir trabajando en la prevención y en la educación, considero que hemos intentado tratar estos proyectos desde las diferentes visiones de cada senador que impulsó alguna situación para que esté contenida dentro del dictamen. En este caso, a los autores de los tres proyectos...

Sra. Presidente. — Perdón senadora, voy a pedir silencio porque está un poquito alto el rumor en la sala.

Ahora sí, continúe por favor.

Sra. Boyadjian. — En este caso, quiero agradecer a los autores de los diferentes proyectos, en el caso de la senadora Iturrez de Cappellini, del senador Linares y de la senadora Aguirre

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.

22

APÉNDICE

I

ACTAS DE VOTACIÓN

Proyecto: CD - 81/16

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 31/05/2017 16:14:17

Acta : 1

Mayoría: MAS 1/2

LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: MICHETTI, Gabriela

Presentes: 58 **Ausentes:** 14 **AMN:** 30



Afirmativos: 58
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abal Medina, Juan Manuel	SI	14	37. Leguizamón, María Laura	SI	60
2. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	53	38. Linares, Jaime	SI	47
3. Aguirre, Hilda Clelia	SI	2	39. Lovera, Daniel Aníbal	SI	6
4. Almirón, Ana Claudia	SI	24	40. Luenzo, Alfredo Héctor	SI	70
5. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		41. Luna, Mirtha M. T.	SI	27
6. Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	42. Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
7. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	43. Martínez, Alfredo Anselmo	SI	40
8. Blas, Ines I.	SI	28	44. Martínez, Ernesto Félix	SI	67
9. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	72	45. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
10. Braillard Pocard, Pedro	AUSENTE		46. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
11. Cabral, Salvador	SI	50	47. Mera, Dalmacio	SI	59
12. Caserio, Carlos Alberto	SI	71	48. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	8
13. Castillo, Oscar Aníbal	AUSENTE		49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	25
14. Catalán Magni, Julio César	SI	52	50. Negre de Alonso, Liliana Teresita	SI	39
15. Cobos, Julio	SI	21	51. Odarda, María Magdalena	SI	48
16. Crexell, Carmen Lucila	SI	63	52. Ojeda, José Anatolio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	53. Pais, Juan Mario	SI	35
18. Durango, Norma Haydee	SI	7	54. Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
19. Elías de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	55. Perotti, Omar Ángel	AUSENTE	
20. Espínola, Carlos Mauricio	AUSENTE		56. Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
21. Fellner, Liliana Beatriz	SI	31	57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	43
22. Fernández Sagasti, Anabel	SI	55	58. Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	26	59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	54
24. Fuentes, Marcelo Jorge	AUSENTE		60. Pinedo, Federico	SI	68
25. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		61. Reutemann, Carlos Alberto	SI	61
26. García, Virginia María	SI	12	62. Riofrío, Marina Raquel	SI	13
27. Giacoppo, Silvia del Rosario	SI	41	63. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	23
28. Giménez, Sandra D.	SI	57	64. Rodríguez Saá, Adolfo	SI	38
29. Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	65. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Rozas, Ángel	AUSENTE	
31. González, Nancy Susana	SI	9	67. Sacnun, María de los Angeles	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Ángel	SI	32	68. Solanas, Fernando Ezequiel	AUSENTE	
33. Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	69. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	30	70. Varela, Marta	SI	66
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	71. Verasay, Pamela	SI	45
36. Labado, María Ester	SI	11	72. Zamora, Gerardo	SI	29

Observaciones: La Senadora García Larraburu, consigna su voto "positivo".
Se vota con modificaciones.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DURANGO

**Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio.
(S.-206/16 y otros.)**

Señora presidente:

Desde hace muchos años insistimos en no hablar sólo de las víctimas de femicidio o en no considerar víctimas sólo a las mujeres asesinadas, porque cuando una mujer es asesinada hay tres generaciones que son desmembradas: la propia víctima, sus madres y padres y, fundamentalmente, quienes nos ocupan en este proyecto: sus hijas e hijos. Cuando su madre es asesinada por su padre, ellos sufren una triple pérdida: la de sus progenitores, y la de su proyecto de vida y contención.

No sólo las víctimas de femicidio están incorporadas en esta iniciativa: incluye tanto a madres como a padres asesinados en un contexto de violencia de género o intrafamiliar. Asimismo, este proyecto incorpora también vínculos familiares diferentes como el que configura un matrimonio igualitario, padres adoptivos y las figura de progenitora o progenitor afín.

A partir del análisis profundo de la situación de las denominadas “víctimas colaterales” de la violencia, ante la ausencia de una asistencia integral y del descubierto en la protección de las niñas y niños que quedan bajo la guarda de la familia –muchas veces sin suficientes recursos económicos para llevar adelante el desarrollo de esa nueva vida de las y los hijos de la víctima–, obviamente, como sociedad nos debíamos esta ley.

En nueve años, desde 2008 a 2016, se registraron en nuestro país 2.919 casos de hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales de femicidio. De ellas, 1.859 son menores de edad.

Quiero reconocer la tarea de visibilización realizada por la organización La Casa del Encuentro y del Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano” –que aportó las primeras estadísticas en este sentido–, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina (RIPVG) –que junto con la organización Amigos del Alma también impulsó esta sanción–, y del resto de las personas que individual y colectivamente dieron los primeros pasos en la redacción del proyecto original conocido como “Ley Brisa”.

Reconozco también el trabajo realizado en comisión para unificar proyectos similares y los aportes que pudimos hacer para extender el alcance de los beneficios de esta ley.

Esta iniciativa reconoce la necesidad de un apoyo integral para estas niñas y niños que quedan huérfanos y que necesitan imperiosamente una ayuda económica, que debe ser mensual y segura; también, la cobertura de una obra social para que puedan contar con una su-

marísima atención de su salud mental y física, porque las secuelas que este tipo de hechos dejan en sus vidas son altamente traumáticas y los afectan en múltiples aspectos.

En promedio, cada semana son seis las niñas y los niños a quienes les matan a su madre. En la mayoría de los casos, sus padres resultan detenidos por ser responsables de esos femicidios. Los chicos quedan desamparados, dependen de otros familiares o, en el peor de los casos, son trasladados a hogares o institutos de menores.

Por lo expuesto, adelanto mi voto favorable a esta iniciativa.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DURANGO

**Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)**

Señora presidente:

Nos encontramos tratando un proyecto que entendemos resultaba absolutamente necesario para fortalecer el rol de la víctima en el proceso penal en el que se ventila la afectación de sus propios derechos.

Antes que nada, debemos decir que participamos de la idea de que el imputado debe contar con los derechos y garantías que le permitan afrontar el poder punitivo del Estado que reprocha su conducta.

No obstante ello, con la misma convicción entendemos que la víctima afectada por el hecho investigado por los efectores del sistema penal debe ver facilitadas sus posibilidades de contar con un protagonismo que hoy muchas veces se les ve negado, especialmente cuando se trata de personas vulnerables. Sabido es que, en muchos casos, la posibilidad de participar en el proceso a través de la figura del querellante requiere del patrocinio de un abogado particular, con los costos económicos que ello significa. De esta forma, el proyecto en tratamiento aspira a terminar –o, al menos, a morigerar– la revictimización que acarrea para el damnificado el desarrollo de un proceso penal en el que, paradójicamente, se investigan afectaciones a sus derechos y donde muchas veces no es otra cosa que un convidado de piedra.

En tal sentido, resaltamos como uno de los aspectos más elogiados de la iniciativa las notificaciones que se deberán cursar a la víctima sobre los hitos más relevantes del proceso penal en la medida en que el mismo avanza o, incluso, respecto de las novedades que se produzcan en la ejecución de la pena.

También debemos resaltar el rol federal que cumplirá el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos que se creará en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre todo en su función de asistencia en forma

coadyuvante que podrá prestar a las Justicias provinciales. También, la colaboración que podrá prestar a las jurisdicciones que ya cuentan con organismos de protección a las víctimas.

Asimismo, celebramos la creación del cargo de defensor público de víctimas en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, quiero resaltar el trabajo de las comisiones de este Senado para la concreción de un texto que entendemos es superior de la media sanción que vino de Diputados y que logró, a través de la readecuación de cargos del Ministerio Público, moderar el gasto que requería la estructura que el texto de Diputados propiciaba.

Resaltando que entiendo que esta iniciativa constituye una medida de política criminal que torna más justo al sistema penal, adelanto que votaré favorablemente el presente proyecto de ley.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA

Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la licitación de la Obra de los Daneses en la provincia de La Pampa. (S.-1.898/17.)

Señora presidente:

Tenemos en claro que hay consultas urgentes y otras impostergables. La situación hídrica de la provincia de La Pampa cumple con ambas cualidades. La producción, el tránsito y la vida misma se han visto modificados con una nueva calamidad cíclica tal como es la inundación que, por diferentes motivos, sacude fuerte al territorio del norte provincial.

Es evidente que la Nación, durante décadas, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de diferentes instituciones, como universidades y ONG, que aconsejaban la realización de obras para morigerar esta clase de fenómenos que cada determinado tiempo, obedeciendo ciclos conocidos, azotan gran parte de nuestro territorio. Hoy nos encontramos nuevamente frente a esta problemática que daña la estructura de la red caminera y a pueblos enteros a lo largo y ancho de la Argentina; que genera un desastre en la maquinaria productiva del interior, con graves consecuencias no sólo para las provincias, sino también para el Estado nacional.

En la provincia de La Pampa hay diversas localidades que están en grave situación al tener comprometido los cascos urbanos. Sumado a esto, muchos productores encuentran grandes problemas de suelo para sacar su producción y, tantos otros, directamente han perdido gran parte de su capital productivo.

Necesitamos que se realicen de manera urgente estas obras de mitigación. Los tiempos de la burocracia no se corresponden con las necesidades perentorias que

tienen estos argentinos que han visto cómo el agua se llevaba el esfuerzo de años de trabajo. A esta dramática situación debemos sumar a niños que no pueden asistir a la escuela, problemas de salud y proliferación de alimañas, entre otros males que son producto directo del fenómeno climático.

Lamentablemente nuestra provincia se ha visto utilizada como zona de sacrificio. Lo hemos visto desde hace décadas con el corte del río Atuel, la sobreutilización del Desaguadero, etcétera.

En la primera administración del ingeniero Verna como gobernador –2003 a 2007– se trabajó con el Instituto Danés de Hidráulica para la construcción de la denominada Obra de los Daneses, que solucionaría el problema de los excedentes de agua de gran parte del noreste del territorio de La Pampa. Solamente pudo realizarse la primera etapa y, luego, la Nación cortó el financiamiento. ¿Por qué? Por los tiempos de la burocracia. Hemos visto con agrado que en la Cámara baja se incluyó en el presupuesto 2017 la segunda y la tercera etapa de la Obra de los Daneses para que en un bajo, en cercanías de Quemu-Quemu, el agua que inunda el norte pampeano durante ciclos lluviosos como el actual sea contenida. La segunda etapa consiste en una nueva presa para generar otro embalse, en este caso ubicado en el paraje La Puma, en el cruce de las rutas provinciales 6 y 3, en cercanías de la estación Trilí. Uno de los canales que colectará el agua de la zona y la llevará hasta el embalse nacerá en Monte Nievas. De concretarse el proyecto tal como fue pensado originalmente, el agua no seguirá su pendiente natural hacia la provincia de Buenos Aires, sino que se la embalsará en una zona de depresión del suelo en La Pampa. Como podemos apreciar, esta obra mejorará notablemente la problemática, por lo que resulta perentoria su construcción.

Presentamos este proyecto a los efectos de tener información fidedigna sobre los mecanismos que el Poder Ejecutivo nacional está implementando para la concreción de la obra en virtud de que el Congreso nacional ya la habilitó con la mencionada inclusión en el presupuesto.

Es por ello que preguntamos:

- a) Si ha comenzado la licitación para la obra;
- b) Fecha de inicio; y
- c) Los plazos de ejecución de la obra.

A la vez, junto con este, presentamos otro proyecto de comunicación sobre el particular en el que, ante la preocupante situación en que se encuentran varios departamentos del norte de la provincia de La Pampa, exhortamos al Poder Ejecutivo nacional a que, a través de los organismos correspondientes, proceda a efectuar la licitación para el comienzo de la Obra de los Daneses en el presente año.

Finalmente, remarcamos que la llamada Obras de los Daneses es un proyecto urgente para la provincia de La Pampa. Por este motivo, esperamos que el Poder

Ejecutivo nacional tome la decisión política de aliviar a los productores y pobladores de la provincia de tan terrible impacto climático.

8

SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR LOVERA

**Declaración de zona de desastre y emergencia
en diversas localidades (S.-1.465/17, S.-2.016/17,
S.-1.673/17 y S.-1.997/17.)**

Señora presidente:

En el departamento Puelén, puntualmente en las cercanías de la ciudad de 25 de Mayo, existen diversos emprendimientos productivos dedicados a la producción de peras que no escapan a las generalidades del resto de las provincias mencionadas en el presente proyecto.

La medida excepcional tendiente a la declaración de emergencia económica, productiva, financiera y social por 365 días pondrá en igualdad a los productores de La Pampa, Mendoza y San Juan junto a los de Neuquén y Río Negro, anteriormente beneficiados.

Esta actividad, fuertemente golpeada, entró definitivamente en crisis al aplicar la República del Brasil barreras sanitarias que fueron impuestas a nuestras exportaciones.

Este proyecto, que avalamos y acompañamos, incorpora a provincias, incluida La Pampa, en los beneficios establecidos por la ley 27.354, hasta aquí vigentes sólo para Neuquén y Río Negro.

Atento a la cruda realidad que viven los productores pampeanos, no puedo menos que expresar mi total apoyo al presente proyecto de ley.

9

SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR LOVERA

**Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)**

Señora presidente:

El presente proyecto de ley es una herramienta más en pos de salvaguardar y ratificar los derechos y garantías de las víctimas de delitos que, de por sí, están en una situación delicada y traumática por los hechos que las tienen como protagonistas.

Luego de las distintas exposiciones –en las reuniones públicas convocadas por las comisiones de Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda– de distintos especialistas y de víctimas, con testimonios extremadamente conmovedores, hemos tomado conciencia de la necesidad de avanzar en la aprobación de este proyecto. Se han consensuado modificaciones, teniendo especial cuidado en contemplarlas todas en esta misma ley y procurando con ello no dejar

nada librado a futuras aprobaciones de otras leyes que sólo retardarían la posibilidad de cualquier víctima de delito de contar con la protección y con la posibilidad de ejercer sus derechos contemplados en este proyecto.

Es por ello que avanzamos en la idea de normar, entre otras cuestiones, el derecho de las víctimas a contar con un defensor público, disponiéndose para ello la creación de veinticuatro cargos de defensor público de víctimas, atendiendo de esta manera uno de los requerimientos fundamentales de las víctimas de delitos. El planteo generalizado ha sido la sensación de inequidad manifiesta en las que las dejaba el Estado al otorgar a los imputados el derecho a un abogado representado por el defensor público oficial, no pudiendo las víctimas tener este mismo derecho cuando sienten claramente que son las titulares del conflicto. Por ello, se incorpora al Ministerio Público de la Defensa a los defensores públicos de víctimas, quienes ejercerán la asistencia técnica y el patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados y siempre que la limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa. Creemos que con esta incorporación contribuimos a reparar dicha inequidad.

Todas las acciones por parte del Estado –que es el que tiene la potestad de velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos– que puedan ser una suerte de bálsamo ante estas situaciones tendrán mi apoyo

Brindar todos los instrumentos posibles, desde la asesoría legal hasta la reforma de dependencias y procedimientos de la Justicia para actuar con inmediatez y presteza, y propender a la creación de instancias de procedimientos expeditivos e información a las víctimas, es una óptima sumatoria de iniciativas que en esta ley se contempla de manera clara y precisa. Se trata, en última instancia, de procurar de manera efectiva protección y acompañamiento legal a las víctimas de delito.

Resumiendo el proyecto en cuestión, podemos decir que hoy las víctimas de delito tendrán derecho a:

–Que se les reciba de inmediato la denuncia del delito por el que fueron afectadas, además de ser informadas sobre sus derechos cuando realicen la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento, recibiendo un trato digno y respetuoso.

–Poder requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés a través de los órganos competentes.

–Ser asistidas, en forma especializada, con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes.

–Intervenir como querellantes o actores civiles en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la

garantía constitucional del debido proceso y a las leyes de procedimiento locales.

–Examinar documentos y actuaciones, y ser informadas verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado, así como aportar información y pruebas durante la investigación.

–Ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal.

–Ser notificadas de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchadas.

–El sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos cuando, por sus circunstancias personales, se encontraran económicamente imposibilitadas de solventarlos.

En los casos de salidas transitorias, como en los casos de libertad condicional, la víctima –aun cuando no se hubiese constituido en querellante– será informada de la iniciación del trámite y serán oídas sus necesidades.

En miras a enfocar la protección del Estado hacia las víctimas de delito, se crean Centros de Asistencia a las Víctimas de Delito (Cenavid) en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que tendrán las siguientes funciones:

–Atender de inmediato a las víctimas que requieran su intervención. A tal fin, se deberá implementar un servicio de urgencia que funcione fuera del horario de atención de sus oficinas que le permita garantizar la asistencia de la víctima en los casos que requieran perentoria intervención.

–Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar la seguridad de la víctima y de sus familiares, en los casos que correspondan. A tal fin, convendrá con los organismos a cargo de la seguridad pública protocolos de actuación que permitan su rápida intervención.

–Adoptar los cursos de acción necesarios para brindar a la víctima un hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia, en los casos que corresponda. A tal fin, convendrá con los organismos e instituciones capacitados para brindarles protocolos de actuación que permitan su rápida intervención.

–Adoptar los cursos de acción necesarios para la atención médica y psicológica de la víctima, en los casos que corresponda. A tal fin, convendrá con las instituciones a cargo de la salud pública protocolos de actuación que permitan su rápida intervención.

–Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar el patrocinio y representación jurídica de la víctima, dándole intervención al Ministerio Público de la Defensa cuando corresponda. Asimismo, acordará mecanismos de cooperación con colegios profesionales, instituciones educativas o académicas u otras asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que se encuentren capacitados para brindarlas.

Señora presidente: también quiero compartir algunas reflexiones.

Estar hoy dando el voto positivo a esta iniciativa me provoca, además de satisfacción, un cierto alivio. Una persona que es víctima de un delito sufre física, psicológica y socialmente. Ese sufrimiento es causado por la conducta violenta a la que fue sometida. Todo esto produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y colectiva, por lo que el delito no solamente afecta profundamente a la víctima, sino también a su familia y a su comunidad. La agresión causada le crea un sentimiento de vulnerabilidad, de angustia, de desconfianza, de inseguridad individual y social. Como mencionan algunos autores, le genera “una verdadera situación de estrés porque significa un daño y un peligro que se refleja en el vivir con el temor y la angustia de ser agredida nuevamente”.

Me hago una pregunta, señora presidenta, señores senadores y senadoras: como sociedad, ¿tenemos la preparación, contamos con la capacidad para poder brindar a la víctima la ayuda necesaria y suficiente? La respuesta es compleja. Si hay algo sobre lo que tengo certeza –siempre bajo la regulación del Estado y de sus instituciones– es que todo debe comenzar en la familia: en la promoción y prevención de vínculos saludables; en el trabajo para el bien común.

Señora presidente: espero y ansío que, con esta herramienta, todos y cada uno de los integrantes de nuestra sociedad nos intereseamos más por la víctima del delito. Sostengo que es muy difícil establecer las verdaderas dimensiones del daño recibido por la víctima, pero esto nunca debe ser un motivo deliberado para responsabilizarla o quitar culpas al delincuente.

Creemos que al incorporar al Código los derechos que asisten a las víctimas de delito hemos dado respuesta a lo requerido por las víctimas en cuanto a ser oídas y a ser partes del proceso, como creemos que deben serlo. Pudimos también lograr que sea factible la aplicación del proyecto que venía de Diputados al dotarlo de previsión de fondos para su funcionamiento; y, finalmente, con la creación de los veinticuatro cargos de defensores públicos de víctimas y el desplazamiento de los demás cargos de la Defensoría General de la Nación, pudimos atender a la necesidad específica planteada sin desarticular el instituto de la defensa y previendo, en los casos específicos, las respectivas partidas presupuestarias a tal fin.

Para terminar, sostengo firmemente que como Estado, cada uno desde el lugar que ocupa, debemos trabajar ardua y profundamente para que los delitos cometidos sean cada vez menos; para que las víctimas de delitos sean cada vez menos. Todo ello, para que nosotros y las generaciones que vienen vivan en una sociedad sana y en paz.

Por lo todo expuesto, fundamento mi voto afirmativo a este proyecto con la seguridad de que estamos legislando de manera adecuada para dar respuesta a la demanda de nuestra ciudadanía ante hechos que vulneran sus derechos.

niñas y adolescentes sin cuidados parentales. El acompañamiento integral del Estado en la protección de los derechos del adolescente, el apoyo económico y la formación, constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se apoyan las iniciativas que todos aquellos que abordamos la temática en estos años, a través de aportes concretos, hemos conformado como un núcleo de consenso que hoy se plasma en una ley para toda la República Argentina. Cada uno de los autores hemos transitado por andariveles diferentes en el proceso de elaboración de nuestros proyectos, apoyados en diferentes equipos de trabajo, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Sin embargo, un núcleo de consenso nos aglutinó y mostró un nivel de madurez que se reflejó en la ley que sancionaremos.

Los países de la región deben reafirmar su compromiso de orientar sus políticas hacia la desinstitutionalización. Esto debe conducirnos no sólo a disponer de formas de cuidado que no impliquen la colocación de los niños en instituciones, sino también a promover un conjunto de prácticas dirigidas a asegurar la reintegración del niño a su medio familiar, siempre que ello sea posible y adecuado a su interés superior o, en su caso, procurar la colocación en formas de cuidado alternativas de tipo familiar o la adopción. En consecuencia, en los casos excepcionales en los que se haya recurrido a la institucionalización, la reinserción social debe prepararse lo más pronto posible en el entorno de acogida y, en cualquier caso, mucho antes de que el adolescente lo abandone.

Desde que se incorporaron las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional –artículo 75– en 1994, se han adaptado progresivamente tanto las leyes nacionales como provinciales relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional, la legislación sobre tutela de la infancia –la Ley de Patronato de Menores 10.903, de 1919– fue modificada en 2005 conforme a las normas de la convención. La nueva ley 26.061, sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sienta las bases de un sistema de justicia de menores y exige la reintegración de los niños institucionalizados a la sociedad. Este marco nacional reduce la carga de la intervención judicial en querellas que involucran a niños, niñas y/o adolescentes, dándoles prioridad al niño y a su familia, y teniendo en cuenta al niño como sujeto de derechos.

Los casos de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas, así como de infractores por debajo de la edad de responsabilidad penal, han sido eliminados de la esfera judicial y delegados a autoridades administrativas y municipales. Sólo se prevé la participación de la Justicia en la supervisión y evaluación de casos en los que el niño sea separado de su familia de origen por razones de protección, y entregado a familias sustitutas o a una institución residencial.

En 1990, la República Argentina ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) y en

1994 este documento se integró al artículo 75 de la Constitución Nacional. Así, la condición jurídica del niño cambió y se dejó de ver como objeto de derecho para ser definido como sujeto de derechos. Este cambio –tomado luego por las legislaciones provinciales–, desde la disciplina del derecho constituye el paradigma jurídico de protección integral de la niñez. Este nuevo paradigma supone que la familia es la institución privilegiada para criar a sus hijos y el Estado asume el rol de garante de que ésta cumpla su función. Este cambio ha de sustentarse en prácticas institucionales acordes.

El último informe publicado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y UNICEF indica que existen en la República Argentina casi 10.000 niños, niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos –es decir, instituciones o esquemas de acogimiento– que son “devueltos” a la sociedad en una situación de vulnerabilidad muy superior a la que ya padecían al ingresar a la institución o al hogar por encontrarse sin cuidados parentales. De estos niños, niñas y adolescentes, 87 % está en instituciones asistenciales –714 instituciones en todo el país– que deben abandonar al cumplir los 18 años. A partir de aquí comienzan a recorrer un camino de reinserción social, generalmente enmarcado en un contexto de gran soledad y discriminación, sin asistencia del Estado. Los motivos principales de este difícil contexto son la falta de redes sociales y de pertenencia estables, el bajo nivel educativo y, como mencionaba anteriormente, el fuerte aislamiento social. Es en este contexto en el que esta propuesta legislativa tiende a generar un espacio institucional de contención para los adolescentes sin cuidados parentales que, institucionalizados o en una familia de acogimiento, deben aprender a transitar el camino a una vida adulta en pleno ejercicio de sus derechos.

Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo para la iniciativa en consideración.

13

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ

Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)

Señora presidente:

Nos proponemos tratar la media sanción venida en revisión de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, que fue ampliamente debatido en el seno del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, y de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara en las cuales, después de escuchar a víctimas, asociaciones que las nuclean, expertos y especialistas, tras un análisis exhaustivo se ha decidido reenviar el proyecto a la Cámara de Diputados con modificaciones, alcanzando una versión de consenso que hoy resulta políticamente viable.

El proceso de construcción de esta norma fue una expresión del trabajo conjunto de la sociedad y de los legisladores buscando dar una respuesta a una cuestión compleja: la representación y protección del derecho de las víctimas en el proceso penal, garantizándoles el patrocinio jurídico gratuito. Sin lugar a dudas un Congreso abierto a escuchar las necesidades de la población es un Congreso que está vivo, que cumple su rol en democracia, que representa a través de la responsabilidad política los intereses del pueblo de la República Argentina.

Todas las víctimas de delitos, sin distinción de si éstos son graves o leves, serán asesoradas. Las víctimas de delitos graves gozarán de asistencia jurídica. Dada la orfandad procesal de las víctimas, desde el Senado se propuso una modificación del proyecto que aún está en discusión: la creación del defensor de los derechos de las víctimas, quien deberá asistirles legalmente y patrocinarlas en cualquier jurisdicción, en cualquier posición procesal que asuman, incluida la de querellante particular o actor civil. Además, agrega que los defensores públicos de las víctimas actúan en todos los procesos comprendidos en la Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, en caso de que la víctima no cuente con abogado particular y a solicitud de ella.

Una víctima silenciada en el proceso penal pasa por un proceso de revictimización. Debemos superar la indiferencia que históricamente ha tenido la Justicia con las víctimas para tener una defensa equitativa durante el proceso, no buscando venganza, sino representación legítima en el camino a la justicia.

Hasta hoy, la normativa argentina en materia del proceso penal permitió a los delincuentes ejercer su legítima defensa con el patrocinio del Estado garantizando el ejercicio de las garantías constitucionales, pero las víctimas no podían participar como querellantes con el patrocinio del Estado. La balanza de la justicia se ha equilibrado. La demanda social se ha elevado y el Congreso responde con medidas concretas que se incorporan al plexo normativo y que deberán fortalecerse con la acción política que dote a la Justicia de los recursos humanos y económicos tendientes a implementar la ley con equidad.

Por lo expuesto, adelanto mi apoyo a la iniciativa bajo tratamiento.

14

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ

**Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio
(S.-200/16 y otros)**

Señora presidente:

El proyecto de ley denominado “ley Brisa” –de autoría del senador Linares y de las senadoras Aguirre

e Iturrez de Cappellini– busca la reparación económica y la asignación de una cobertura de salud para las víctimas colaterales –como lo son los niños, niñas y adolescentes– del femicidio de su progenitora o del fallecimiento de alguno de sus progenitores a causa de violencia familiar.

Es fundamental que ante la ausencia del Estado, que no puede evitar ni prevenir el resultado de la pérdida de su progenitora por delito de femicidio o de alguno de sus progenitores por violencia familiar, sea el mismo Estado el responsable de garantizar los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes que requieran ser cubiertos.

En promedio, cada semana son seis las niñas y los niños a quienes les matan a su madre. En la mayoría de los casos, sus padres resultan detenidos por ser responsables de esos femicidios. Los chicos quedan desamparados y dependen de otros familiares o, en el peor de los casos, son trasladados a hogares o institutos de menores.

Según la asociación civil La Casa del Encuentro, entre los años 2008 y 2016 se registraron 2.919 hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del femicidio; y 1.859 son menores de edad.

Aquellos niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre por culpa del homicida, que es su propio padre, sufren inevitablemente. Si bien una reparación económica no les devolverá a su madre con vida, sí les permitirá acceder al derecho a una cobertura de salud. Se trata de una reparación económica equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos, y los ayudará a cubrir sus necesidades básicas para el desarrollo y el crecimiento de su vida hasta los veintiún años de edad.

Con este proyecto se logra visibilizar que no son sólo las mujeres las víctimas, sino que también están los niños, niñas y adolescentes quienes sufren su pérdida.

15

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ

Modificación de la ley 23.351, de Bibliotecas Populares, respecto de la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico (O.D. N° 163/17)

Señora presidente:

Acompaño con mi voto el presente proyecto de ley de las señoras senadoras Durango y Pilatti Vergara –S.-1.325/16– por el que se modifica la Ley de Bibliotecas Populares respecto de la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico. Considero dicho proyecto un aporte a la cultura de la sociedad dado que con esta medida se avanza sobre la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas populares, que es un bien de la comunidad para garantizar el derecho a la información y fomentar la lectura.

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GARCÍA LARRABURU

**Régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio
(S.-206/16 y otros)**

Señora presidente:

Considero que, al compás del #NiUnaMenos, se requieren medidas urgentes para erradicar la violencia de género y políticas de Estado que acompañen a las víctimas y a sus familias.

El altísimo índice de femicidios ocurridos entre 2008 y 2015 dejó a más de 2.518 hijos e hijas sin madre. Hablamos de niñas, niños y adolescentes que no sólo padecen el hecho de una madre asesinada por su padre, sino que también sufren un desamparo económico absoluto. Por ello, creo que es fundamental avanzar en la sanción de esta ley, que busca otorgar una reparación económica por parte del Estado a las víctimas colaterales del femicidio.

El Estado está obligado a acompañarlas a través de una asistencia integral que incluya herramientas sociales, psicológicas, políticas y económicas, a fin de ayudarlas a transitar con dignidad sus vidas.

Los atroces casos de femicidio siguen en aumento. Hace apenas unos meses moría una mujer cada treinta horas. Hoy muere una mujer cada dieciocho. Se trata de una realidad concreta, donde las víctimas directas y colaterales continúan en ascenso.

Aquellas hijas e hijos tienen derecho a una vida libre de violencia no sólo con el objeto de reparar el gran daño que sufrieron, sino, también, por la necesidad de vivir en una sociedad más humanitaria.

25

SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MERA

**Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)**

Señora presidente:

El proyecto en cuestión propone un cambio fundamental de paradigma en el marco del proceso penal argentino.

En orden a los principios, derechos y garantías que rodean al proceso penal, no cabe duda de que existe una posición de especial tutela respecto del imputado, pero ello en modo alguno resulta un impedimento para que el Estado reconozca y tutele con mayor amplitud los derechos de la víctima e implemente acciones que le faciliten el acceso a la Justicia en respeto del principio de igualdad, de raigambre constitucional.

Se ha expresado en este sentido: “[...] Las víctimas en general y de delitos en particular, cuentan hoy con distintos niveles de protección y apoyo, pero la realidad

iberoamericana sigue evidenciando obstáculos para que accedan al sistema judicial y obtener de él una respuesta efectiva. [...] Hasta ahora, la participación y las necesidades de las víctimas no son consideradas de manera integral por los sistemas judiciales nacionales. A pesar de las importantes reformas procesales para la tutela de los derechos de las víctimas en el proceso penal, aún está lejos de garantizar un verdadero equilibrio entre las partes, con detrimento de los derechos de las víctimas de delitos y de otras manifestaciones de violencia. La participación en el proceso judicial no puede convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad para la víctima”.¹

La perspectiva a tomar exige que entendamos que el delito no sólo ocasiona un daño a la sociedad toda, sino que afecta, a su vez, a quien resulta víctima del hecho. La legislación debe ser tendiente a no limitar la participación de la víctima en el proceso penal, sino, por el contrario, a evitar la “revictimización” y dotarla de herramientas eficaces para asegurarle la mayor amplitud en la tutela de sus derechos, todo ello en el marco del Estado constitucional social de derecho.

Esta iniciativa viene, en buena hora, a reconocer a la víctima un lugar de participación activa en las distintas etapas del proceso y a tutelar derechos fundamentales tales como la igualdad, el derecho a ser oída, adecuada asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la Justicia, tratamiento justo, reparación y demás derechos constituidos en nuestra Constitución nacional y en diversos tratados internacionales que, a partir del año 1994, cuentan con jerarquía constitucional –artículo 75, inciso 22–.

Se trata entonces, esencialmente, de un proyecto de neto carácter tuitivo con miras a lograr condiciones adecuadas tendientes a respetar, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

A esos fines, la regulación propuesta establece el alcance del concepto de víctima –capítulo I. Enuncia cuáles son sus derechos –capítulo III– y, como contrapartida, impone deberes concretos a las autoridades.

Sin embargo, la tutela que aquí se encuentra en juego requiere de acciones positivas a desplegar por parte del Estado que se traduzcan en la efectiva realización de los derechos tutelados a efectos de evitar que sean una mera abstracción.

Estas cuestiones se ven reflejadas en el proyecto que, entre otras medidas, dispone la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos –capítulo V– en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con funciones vinculadas con las distintas formas de asistencia a la víctima, y del defensor público de víctimas –capítulo VI–, como el órgano encargado de ejercer la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos

¹ Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Cumbre Judicial Iberoamericana. Año 2012. En: <http://www.cumbrejudicial.org>. (fecha de consulta mayo de 2017)

en procesos penales, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados y siempre que la limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

Otro avance de importancia es el fortalecimiento del derecho de la víctima a ser oída en el proceso penal. Esta circunstancia se advierte, por ejemplo, en el reconocimiento del derecho a ser informada y a expresar su opinión durante la ejecución de la pena cuando se sustancie cualquier planteo vinculado con regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, semidetención o libertad asistida.

Asimismo, el proyecto establece que la víctima tendrá derecho a acceder en forma gratuita al patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos y en su caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo. Esta disposición implica una concretización del derecho fundamental de acceso a la Justicia para la víctima del delito, quien muchas veces no cuenta con los recursos necesarios para poder acudir a un profesional del derecho que la represente en el proceso penal.

26

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIACOPPO

Modificación de la ley 26.485 para incorporar la violencia pública política como un nuevo tipo y modalidad a las ya existentes (S.-4.213/16)

Señora presidente:

El proyecto S.-4.213/16 de la senadora González incorpora la violencia política a la ley 26.485. Modifica la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, respecto de incorporar la violencia pública política como un nuevo tipo y modalidad a las ya existentes. Ésta es la modificación central. Ampliamente apoyada por ambas comisiones, responde a las iniciativas planteadas en la declaración de la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, realizada en Lima en octubre 2015, tomando como antecedente la ley 243 de 2012, sancionada por Bolivia y promocionada por la Asociación de Alcaldesas y Concejales de Bolivia.

En la Cámara baja, de acuerdo con un estudio de *Directorio Legislativo*, en 1991, año de la sanción de la ley de cupo femenino, había solo 12 diputadas: un 5 % del total. Esa cifra fue creciendo hasta alcanzar un récord de 40 % en 2008-2009; mientras, hoy hay 99 mujeres sobre 257, o sea un 38,5 % de la Cámara. En el Senado, las mujeres llegan al 41,7 % debido a que, para cumplir con el cupo del 30 %, en las listas de sólo dos candidatos, es obligatoria la inclusión de una mujer. Sin embargo, las mujeres presiden menos del 30 % de las comisiones en las dos Cámaras.

En las provincias la situación se replica. En ninguna de las veinticuatro legislaturas del país hay más mujeres que hombres. De acuerdo con un informe de *Directorio Legislativo*, los casos más notorios son los de Santa Fe, Santa Cruz y San Juan, donde las legisladoras no llegan al 25 % del total. En las dos primeras provincias incide el sistema legislativo, dado que Santa Fe tiene Senado, donde sólo una de sus 19 integrantes es mujer, y Santa Cruz cuenta con un sistema mixto, en el que diputados y senadores integran una misma Cámara. En el otro extremo, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego son las tres provincias con mayor presencia femenina en sus legislaturas: más del 45 %.

Esta situación se agrava en los poderes donde no existe una ley de cupo. De los 22 ministros que tiene el gabinete de Mauricio Macri sólo tres son mujeres. La situación se repite en las provincias.

Según un relevamiento de Laura Echezarreta del grupo de mujeres del GEN que lidera Margarita Stolbizer, en los gabinetes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires hay más de 190 ministros y menos de 40 ministras: es decir que las mujeres no llegan al 20 %. Esto se profundiza en las cinco provincias gobernadas por mujeres. Otro dato significativo: en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires hay sólo cuatro con intendentes mujeres.

27

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIACOPPO

Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio (S.-206/16 y otros)

Señora presidente:

Este proyecto fue promovido por la asociación civil La Casa del Encuentro para dar respuesta a la importante cantidad de víctimas colaterales de femicidios: hijas e hijos que quedaron sin madres, asesinadas por la violencia sexista.

En nueve años se han registrado 2.919 hijos e hijas que quedaron sin madre, siendo 1.859 de ellos menores de edad. La sanción de esta ley, que permitirá la reparación económica de las víctimas colaterales de femicidio, junto con la sanción de la privación automática de responsabilidad parental que esperamos tratar el miércoles, constituyen el capítulo más importante en las reformas legislativas necesarias para reparar los daños que han sufrido y sufren cotidianamente las víctimas de la violencia de género y, en especial, niños y niñas.

A pedido de la senadora Aguirre se incorporó el inciso c) sobre violencia intrafamiliar o de género, que amplía el universo de beneficiarios/as de la propuesta. La violencia intrafamiliar responde al paradigma anterior a la CEDAW, donde se entendía que las relaciones

30

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VARELA

**Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías
de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)**

Señora presidente:

Primero que nada, quiero destacar el eficaz trabajo parlamentario que se vino haciendo durante todos estos meses para que podamos estar tratando hoy en el recinto la Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, una ley que forma parte de la política de Estado integral conocida con el nombre de Justicia 2020, que viene impulsando nuestro gobierno y que hace efectivas las cuatro metas claras que plantea. Éstas son: cercanía a la gente, modernidad, independencia y transparencia.

Antes que nada, quiero decir que esta ley logra algo fundamental: reconocer a la víctima. Para reconocerla, primero hay que ponerle nombre y apellido. Por eso, mediante la aprobación de esta ley los expedientes que se tramitan por tribunales dejarán de ser anónimos.

Por otro lado, con esta norma se garantiza que las víctimas y sus familiares cuenten con las medidas de cuidado y asistencia que requieran. Significa proporcionar atención, asesoramiento jurídico gratuito y asistencia psicológica especializada. Resumidamente, no es otra cosa que facilitar a las víctimas el acceso a una Justicia independiente y que puedan hacerlo mediante canales rápidos, modernos y transparentes.

Desde nuestro gobierno estamos convencidos de que la transformación integral de las instituciones debe darse mediante un proceso de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas: el tratamiento de esta norma fue resultado de ello. En él estuvieron implicados referentes del ámbito de la Justicia, profesionales, ONG, expertos, legisladores, jueces, y las víctimas y familiares de víctimas de delitos, que aportaron su visión y trabajo para lograr el texto que hoy estamos votando.

Quisiera dedicar un párrafo aparte a las víctimas y familiares de víctimas de delitos porque son ellos los principales protagonistas del trabajo hecho en torno a esta normativa. Sinceramente, cuando estuve escuchando sus testimonios en el marco de la Comisión de Justicia, de la que soy miembro, no pude dejar de involucrarme con completa responsabilidad y convicción en este tema. No hay mejor manera que legislar conforme a los derechos y a las necesidades que los mismos protagonistas nos transmiten y, por ende, nos hace involucrarnos de una forma superadora. Y los felicito y admiro por poner en acción la resiliencia y la lucha en el ámbito de la Justicia para

contribuir desde su lugar, junto a nosotros, a que las leyes sean cambiadas.

Tengo la convicción de que cuando sancionamos leyes tenemos que preguntarnos cuál es el camino más justo, por lo que no tengo ninguna duda de que con el presente proyecto hemos dado un paso importante para poder garantizar una convivencia no sólo más justa y equitativa, sino que estamos dando herramientas fundamentales para cambiar radicalmente la realidad de quienes deben transitar el penoso camino de pedir justicia.

Por último, quiero cerrar mi alocución dando mi voto positivo a esta ley que implica un enorme avance en lo que para nosotros es una política de Estado, expresando mi deseo de seguir fortaleciendo una Justicia que esté cerca de las personas que más la necesitan, que garantice soluciones rápidas, confiables e imparciales, y que sea responsable por sus actos ante la sociedad.

Si bien las transformaciones no se hacen de manera inmediata, espero que en este recinto podamos seguir orientando el trabajo en materia de justicia hacia esos objetivos en el corto plazo.

31

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VERASAY

**Declaración de zona de desastre y emergencia
en diversas localidades (S.-1.465/17, S.-2.016/17,
S.-1.673/17 y S.-1.997/17)**

Señora presidente:

El presente proyecto tiene como objetivo otorgar a la cadena de producción de peras y manzanas de la provincia de Mendoza los mismos beneficios de la ley 27.354, considerados para las provincias del Neuquén y Río Negro.

En primer lugar, compartimos plenamente el diagnóstico plasmado en numerosos estudios y en los fundamentos de la ley citada respecto de la crisis que atraviesa el sector provocada por factores tanto externos como internos.

Particularmente, existe sobreproducción de manzanas a nivel global como consecuencia de la mayor superficie plantada y de los aumentos del rendimiento promedio, directamente relacionado con la aplicación de tecnología de manejo y la contribución del mejoramiento genético. Un ejemplo del cambio producido en los últimos 20 años es el caso de la producción de manzanas en China que, según la FAO, pasó de un poco más de 14 millones de toneladas –lo que representaba el 28 % de la producción mundial en 1995– a casi 40 millones de toneladas en 2013, con el 49 % del total mundial. Este extraordinario cambio por sí solo explica gran parte del problema existente en el sector de man-